



**Pronunciamento del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos,  
José Apolonio Tobar Serrano, respecto a la impunidad en la ejecución extralegal de  
Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en el marco del aniversario 40 de su martirio**

El 24 de marzo de 1980, en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador, mientras celebraba misa, fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez; de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, las personas responsables de dicha ejecución extralegal son: el ex Mayor Roberto D'Aubuisson, los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, además Fernando Sagrera, Mario Molina, Amado Antonio Garay y Walter Antonio "Musa" Álvarez. Asimismo se hace ver que la Corte Suprema de Justicia es responsable de asegurar la impunidad respecto a la autoría intelectual del asesinato<sup>1</sup>.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de fondo 37/00 de 13 de abril del año 2000, le ordenó al Estado salvadoreño: investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extralegal de Monseñor Romero, reparar las consecuencias de las violaciones cometidas y adecuar la legislación interna a la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993.

En julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del ordenamiento jurídico la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, normativa que impidió durante más de 23 años el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambas partes en el contexto del conflicto armado.

Ahora se cumplen 40 años del momento aquel en que fue segada la vida física del más representativo de los defensores de derechos humanos de este país, por parte de un grupo armado ilegal con apoyo y aquiescencia del Estado. Desde esa fecha han pasado casi 20 años desde que el organismo regional de Derechos Humanos ordenara al Estado salvadoreño esclarecer, investigar, sancionar y reparar la grave violación cometida, y más de 3 años desde que se dejó sin efecto la Ley de Amnistía de 1993 sin que se conozcan mayores avances en la investigación de los hechos.

He constatado la poca voluntad del Órgano Legislativo de garantizar los derechos de las personas ofendidas por las atrocidades cometidas en el contexto del conflicto armado interno, a pesar de que las propias víctimas les han hecho llegar propuestas pertinentes y de existir una orden de la Sala de lo Constitucional de promulgar una normativa que garantice el acceso a la verdad, que se aplique la justicia a los responsables, se generen garantías de no repetición y se repare el daño causado a las víctimas.

En cuanto al Órgano Judicial y Fiscalía General de la República, aunque es positiva la reapertura y continuación de la investigación del cruel asesinato de Monseñor Romero y Galdámez en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, dada en mayo de 2017, aquella no avanza, a pesar de tener claras pistas, nombres e indicios para avanzar en las pesquisas. A partir del 22 de octubre de 2018, el proceso judicial se dividió en dos: el proceso histórico que el referido juzgado lleva contra Álvaro Saravia y las investigaciones que éste ha ordenado a Fiscalía General de la República para enjuiciar a otros autores ya mencionados.

<sup>1</sup> P. 132.



El 4 de este mes el juzgado de la causa tomó declaración de una abogada que participó en el juicio contra Álvaro Saravia implicado en la ejecución extralegal de Monseñor Romero.

Estimo que no se está cumpliendo el principio de debida diligencia en realizar una investigación exhaustiva, completa, imparcial, de forma inmediata y sin dilaciones.

Por lo anterior, con base en mis atribuciones conferidas por el artículo 194 romano I, ordinales 1°, 3° y 7° de la Constitución de la República, en mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, RECOMIENDO:

Al señor Fiscal General de la República, doctor Raúl Ernesto Melara Morán, que desarrolle una investigación seria, eficaz, oportuna y concluyente sobre la ejecución extralegal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ya que tanto la legislación procesal penal de 1974 como la vigente le otorgan amplias facultades de investigación.

Al señor Juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, licenciado Rigoberto Chicas, cumpla su obligación de proteger los derechos de las víctimas, impulsando una investigación seria, eficaz, oportuna, exhaustiva y concluyente, ordenando al señor Fiscal General de la República todas las diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos, la investigación y sanción de todas las personas responsables de la ejecución extralegal de Monseñor Romero.

Al presidente de la República, haga uso de su investidura para impulsar la investigación de esta y todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado y asegure la confluencia de cualquier información que obre en los archivos de instituciones bajo su responsabilidad para que las víctimas del conflicto armado tengan acceso a la Verdad.

San Salvador, 24 de marzo de 2020

**José Apolonio Tobar Serrano**  
**Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos**